



BRASIL

Observaciones y recomendaciones de mecanismos de derechos humanos relacionados con empresas y derechos humanos¹

Examen Periódico Universal

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (A/HRC/36/11)

Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado

94. El Brasil también había recurrido a todas las medidas jurídicas disponibles en relación con la responsabilidad de las empresas por vulneraciones de los derechos humanos. Con respecto al accidente ocurrido en la presa de Fundão en 2015, se había pagado una ayuda de emergencia directa a alrededor de 20.000 personas. Hasta marzo de 2017 se había invertido en medidas de reparación una suma que equivalía aproximadamente a 566 millones de dólares de los Estados Unidos. Además, se habían impuesto multas considerables a las empresas responsables del desastre. Los tribunales estaban examinando una demanda por un valor aproximado de 55.000 millones de dólares presentada por las autoridades competentes contra las empresas en cuestión.

95. En relación con las formas contemporáneas de la esclavitud, en 2014 se había aprobado una enmienda constitucional que permitía la expropiación de propiedades donde se hubieran descubierto condiciones de trabajo análogas a la esclavitud. En 2016 se aprobó el Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo. Las personas y empresas descubiertas utilizando este tipo de mano de obra se incluían en una “lista negra”, cuya última versión se publicó en marzo de 2017.

Conclusiones y/o recomendaciones

136.51 Elaborar un plan nacional de acción sobre las empresas y los derechos humanos a fin de impedir que los proyectos de desarrollo vulneren los derechos de las poblaciones tradicionales, los pueblos indígenas y los

¹ Esta información fue elaborada por ACNUDH en el marco del Proyecto CERALC en base a información públicamente disponible a febrero de 2021.

trabajadores y causen daños al medio ambiente, y a fin de garantizar que existan remedios eficaces gracias a consultas significativas con las comunidades afectadas (Países Bajos);

- 136.52 Elaborar un amplio plan nacional de acción sobre las empresas y los derechos humanos que tenga en cuenta los Principios Rectores de las Naciones Unidas en la materia (Paraguay);
- 136.53 Elaborar un plan de acción para las empresas y los derechos humanos (Sierra Leona);
- 136.54 Proseguir los esfuerzos encaminados a castigar a los culpables de la rotura de los muros de contención en Jacarei y Mariana; y velar por que se garantice a las víctimas de ese episodio el acceso a la justicia y su derecho a compensación, remedio y reparaciones justas por los daños causados. Recomendamos que el Brasil dé a conocer las experiencias adquiridas mediante su participación constructiva y sustantiva en el Grupo de Trabajo Intergubernamental establecido por la resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos (Ecuador);

Estas recomendaciones fueron asumidas voluntariamente por Brasil (A/HRC/36/11/Add.1).

Comité de Derechos Humanos – CCPR

Comité de Derechos Humanos, *Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 40 del Pacto (CCPR/C/BRA/CO/2) (1 de diciembre de 2005)*

6. Preocupa al Comité la lentitud de la demarcación de las tierras de los indígenas, las expulsiones forzadas de poblaciones indígenas de sus tierras y la falta de recursos jurídicos para invalidar esas expulsiones e indemnizar a las poblaciones damnificadas por la pérdida de su vivienda y medios de subsistencia (arts. 1 y 27).

El Estado Parte debería acelerar la demarcación de las tierras de los indígenas y prever recursos civiles y penales para los casos de usurpación deliberada de esas tierras.

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial – CERD

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), *Examen de los informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención, UN Doc CERD/C/64/CO/2 (28 de abril de 2004)*

15. Si bien el Comité toma nota del objetivo del Estado Parte de finalizar la demarcación de las tierras indígenas para 2007 y considera que es un paso importante encaminado a garantizar los derechos de las poblaciones indígenas, le preocupa que la posesión y

utilización efectivas de las tierras y recursos indígenas continúen viéndose amenazadas y restringidas por las agresiones reiteradas contra las poblaciones indígenas.

(...) [E]l Comité recomienda que el Estado Parte adopte medidas urgentes para reconocer y proteger en la práctica el derecho de las poblaciones indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos. En este sentido, el Comité invita al Estado Parte a que informe sobre la solución de los casos de intereses contrapuestos en relación con tierras y recursos indígenas, en particular aquellos en que se ha desplazado a grupos indígenas de sus tierras.

16. Al Comité le preocupa que sólo se hayan reconocido oficialmente unas pocas comunidades conocidas como quilombos y que aún sea menor el número de dichas comunidades que ha recibido títulos de propiedad permanente de sus tierras.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – CESCR

Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Brasil, UN Doc E/C.12/BRA/CO/2 (12 de junio de 2009)

15. El Comité toma nota con inquietud del gran número de brasileños empleados en condiciones inhumanas y degradantes análogas a la esclavitud o sujetos a trabajo forzoso y otras condiciones de explotación laboral, en particular en la tala de bosques, la extracción maderera y la cosecha de caña de azúcar, y expresa su preocupación por la manera desproporcionada en que el fenómeno del trabajo forzoso afecta a los jóvenes de familias de bajos ingresos (art. 7).

El Comité recomienda que el Estado parte:

- a) Adopte medidas eficaces para poner fin a todas las formas de explotación laboral;
- b) Vele por que se enjuicien estrictamente las violaciones relativas a las prácticas laborales prohibidas, como el trabajo forzoso;
- c) Proporcione información, en su próximo informe periódico, sobre las medidas adoptadas para hacer frente a las condiciones laborales de explotación y sobre las repercusiones de dichas medidas.

16. El Comité observa con preocupación la persistencia de desigualdades raciales en el acceso al empleo, que afectan en particular a los afrobrasileños y a los pueblos indígenas. Preocupa además al Comité la disparidad de las condiciones de trabajo basada en el género y la raza, a pesar de las iniciativas del Estado parte para remediarla. El Comité observa asimismo con pesar la falta de datos estadísticos sobre la medida en que los indígenas que viven fuera de asentamientos tienen acceso al empleo (arts. 2, párr. 2, y 7).

El Comité recomienda al Estado parte que siga fortaleciendo los mecanismos jurídicos e institucionales encaminados a luchar contra la discriminación en el ámbito del empleo y a facilitar a las mujeres y las personas pertenecientes a minorías raciales, étnicas y nacionales la igualdad de acceso a las oportunidades de empleo. El Comité pide al Estado parte que, en su próximo informe periódico, proporcione información sobre la medida en que los indígenas que viven fuera de asentamientos pueden acceder al empleo.

Comité de los Derechos del Niño –CRC

Committee on the Rights of the Child, *Concluding observations on the combined second to fourth periodic reports of Brazil*, UN Doc CDC/C/BRA/CO/2-4 (30 October 2015)

Disponible solo en inglés

Children's rights and the business sector

21. The Committee takes note of Act No. 11.265 of 2006, which regulates food industry advertising and marketing practices as regards children. However, the Committee is deeply concerned that activities of the mining and construction sectors, as well as of agribusinesses, food corporations and large-scale sporting and/or entertainment events, frequently results in the resettlement of communities without compensation or appropriate services, the contamination of water resources and food, unhealthy diets due to misleading advertisements, and environmental degradation. The Committee is also concerned about the lack of regulatory frameworks covering the social and environmental responsibility of business corporations and industries.

22. In the light of its general comment No. 16 (2013) on State obligations regarding the impact of the business sector on children's rights, the Committee recommends that the State party:

- a) Establish a regulatory framework to deal with the impact of the business sector on children's rights, particularly that of the mining and construction sectors, agribusinesses and food enterprises, and that of large-scale sporting or entertainment events, operating in the State party, to ensure that their activities do not negatively affect human rights or endanger environmental or other standards, especially those relating to children's rights;
- b) Ensure effective implementation by companies of international and national environmental and health standards, effective monitoring of the implementation of those standards, and appropriate sanctions and/or remedies when violations occur;
- c) Require companies to undertake assessments of, consultations on and full public disclosure of the environmental, health-related and human rights impacts of their business activities and their plans to address such impacts.

Environmental health

65. With reference to paragraph 22 above, the Committee is concerned about the negative effects of polluted air, water and soil, and of food contamination, on children's health. It is particularly concerned about:

- (a) The excessive use of agrochemicals, the detrimental effect of this on children's health, and incidents of crop dusters spraying pesticides and/or other toxic chemicals close to villages and schools, which has led to the poisoning of children;
- (b) The contamination of water resources, inter alia in the area between the Tapajós and Xingu rivers in the state of Pará, caused by mining activities and industrial projects, which is particularly affecting the health of indigenous children;
- (c) The decreased availability of drinking water, the deterioration in its quality and the increase in the incidence of water-related disease outbreaks such as malaria, caused by the construction of the Belo Monte dam and similar projects, which particularly affects indigenous children's health.

66. The Committee recommends that the State party:

- (a) Ensure that existing laws and regulations concerning the use of agrochemicals are strictly enforced, particularly with regard to the use of crop dusters in proximity to villages and schools, expedite the evaluation of agrochemicals by allocating the necessary human, technical and financial resources to the National Health Surveillance Agency and expeditiously ban agrochemicals that have been widely banned in other countries;
- (b) Improve water supply infrastructure and guarantee access to safe drinking water, particularly for communities living adjacent to contaminated water canals used for the irrigation of farms;
- (c) Expeditiously end illegal mining activities, particularly in the TapajósXingu area, and design and implement measures to mitigate the negative effects of these activities and those related to the construction of the Belo Monte dam on the rights of indigenous children and their families;
- (d) Undertake awareness-raising programmes for communities living in affected areas to minimize the risks of being exposed to contaminated water and food, and for users of such agrochemicals;
- (e) Conduct a comprehensive assessment of the effects of polluted air, water and soil on children's health and use it as a basis for developing and implementing a strategy to remedy the situation, and monitor the levels of air, water and soil pollutants and of pesticide residues in the food chain.

Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad - CRPD

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Observaciones finales sobre el informe inicial del Brasil, UN Doc CRPD/C/BRA/CO/1 (29 de septiembre de 2015)

Trabajo y empleo (art. 27)

48. El Comité observa con preocupación la discriminación de las personas con discapacidad, especialmente de las mujeres con discapacidad, en el ámbito del empleo, y su persistente dependencia de los talleres protegidos. También le preocupa la escasa

observancia del sistema de cuotas previsto para las empresas privadas de 100 o más empleados.

49. El Comité recomienda al Estado parte que elabore y aplique, en consulta con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, una estrategia coordinada para aumentar el empleo de personas con discapacidad en el mercado laboral abierto, que incluya medidas destinadas específicamente a las mujeres con discapacidad. También le recomienda que adopte sin demora medidas para p

Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos

Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión al Brasil (12 de mayo de 2016) (A/HRC/32/45/Add.1)

Disponible solo en inglés

Conclusions and recommendations

67. *The Working Group welcomes the commitment of the Government of Brazil to the Guiding Principles on Business and Human Rights and its interest in developing a national action plan on business and human rights. As the Government considers how best to advise businesses, including the many State-owned enterprises in Brazil, in relation to their responsibility to respect human rights, the Working Group stands ready to continue the dialogue on how to overcome obstacles on the basis of best international practice.*

68. *A key finding of the visit was the need to further strengthen the support provided to rights holders to enable them to be in a balanced position vis-à-vis companies and public officials. The affected communities with whom the Working Group met conveyed a sense of vulnerability, isolation and rejection by the decision makers and those with power. The Working Group emphasizes the importance of the Government and businesses listening to the voice of the most marginalized. Deeply considering the opinions and experiences of those affected by, for example, large development projects, is essential to ensuring that human rights are not jeopardized in the pursuit of economic growth.*

69. *The Working Group makes the following recommendations to the Government, business enterprises and civil society organizations.*

70. *The Working Group recommends that the Government:*

- (a) Raise awareness and build the capacity of civil servants and lawmakers on the respective obligations and responsibilities of the Government and all business enterprises, including State-owned enterprises, to prevent and address adverse business-related human rights impacts, in line with the Guiding Principles on Business and Human Rights;*

- (b) Set out clear expectations in relevant policies that all business enterprises in Brazil respect human rights throughout their operations and conduct human rights due diligence in relation to their domestic and international operations;*
- (c) Encourage the Brazilian Development Bank (BNDES) to ensure that bank-funded projects include safeguards against adverse human rights impacts, in line with the Guiding Principles;*
- (d) Develop a national action plan on business and human rights on the basis of multi-stakeholder engagement;*
- (e) Create platforms and strengthen mechanisms for dialogue between Government, businesses and civil society on business and human rights issues;*
- (f) Include human rights considerations in public procurement policies and include the corporate responsibility to protect human rights in procurement contracts;*
- (g) Reinforce the importance of compliance with the Guiding Principles on Business and Human Rights and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises in relation to domestic and overseas business activity and highlight the progress made by State-owned enterprises that have already committed to such compliance;*
- (h) Build on the current programmes and policies to combat child and forced labour and avoid weakening safeguards, including the current definition of slave labour;*
- (i) Conduct a review of access to effective remedy with a view to strengthening judicial and non-judicial mechanisms to identify and address business-related human rights abuses;*
- (j) In the context of improving access to remedy, require the ombudsperson of the Brazilian Development Bank (BNDES) to provide information regarding the content of past or pending complaints, the outcomes of closed cases or the rationale for determinations regarding individual complaints;*
- (k) Strengthen the capacity of, the resources allocated to and coordination between the Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources and the Brazilian National Indian Foundation in order to strengthen the regulation of large development projects and deliver sustained protection for affected communities;*
- (l) Enhance the technical capacity and the resources of the Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources to enable it to better monitor the social and environmental impacts of large development projects and the fulfilment of any conditions imposed in mitigation plans;*
- (m) Strengthen the dam inspection activities undertaken by the National Department of Minerals Research so as to improve governmental oversight and prevent further collapses;*

- (n) *Ensure that, where disasters like the collapse of the Fundão tailings dam occur, adequate compensation is provided to all those affected, following full consultation, and that adequate environmental mitigation and remediation measures are carried out;*
- (o) *Apply its best efforts to seek to prevent the deletion of key environmental protections from the Mining Code and also apply its best efforts to seek to ensure that infrastructure licensing processes contain thorough social and environmental considerations;*
- (p) *Apply its best efforts to seek the appropriate level of resources to enable federal and state prosecutors to continue to challenge the actions of companies and public bodies;*
- (q) *Review the current use of the legal mechanism of “safety suspension” with a view to ensuring that it does not amount to an obstacle to access to justice for communities affected by large-scale development projects;*
- (r) *Ensure that rights holders and stakeholders (especially the most vulnerable) who may be affected by development projects receive information, including adequate legal advice, in order to be in a balanced negotiating position with a company;*
- (s) *Apply its best efforts to provide the Brazilian National Indian Foundation with the resources necessary to properly and promptly carry out - land demarcation and also apply its best efforts to seek to ensure that the demarcation of indigenous land remains the responsibility of the executive branch of Government;*
- (t) *Increase resources for the National Programme for the Protection of Human Rights Defenders and place emphasis on alleviating the social, political and economic conditions that place human rights defenders at risk;*
- (u) *Provide enhanced human rights training to staff of ministries, officials responsible for environmental licensing and judges so as to ensure that current legal principles, human rights standards and international best practices are known and applied by decision makers.*

71. *The Working Group recommends that all business enterprises, including private enterprises and State-owned enterprises:*

- (a) *Comply with their responsibility to respect international human rights by adopting a human rights policy and carrying out human rights due diligence to identify, prevent, mitigate and account for how they address adverse human rights impacts;*
- (b) *In assessing actual or potential adverse human rights impacts, ensure meaningful consultation with potentially affected individuals and communities, paying attention to potentially vulnerable or marginalized groups and ensuring that they have timely and complete information about proposed projects or changes that may affect them and the capacity to put forward their opinions;*

- (c) *Pay particular attention to how human rights risks affect women, children and men differently, especially regarding construction and infrastructure projects involving access to land and the resettlement of communities;*
- (d) *Establish and run operational grievance mechanisms in line with Guiding Principle 31, in order to identify and address adverse impacts;*
- (e) *Engage in the development of a national action plan on business and human rights;*
- (f) *Engage with the Global Compact Network Brazil and business associations to promote understanding of and to learn from the experiences of implementing the Guiding Principles;*
- (g) *Ensure greater focus on safety and contingency plans, particularly companies operating mines and infrastructure development projects, and draw on the United Nations Environment Programme technical report No. 41, “APELL for Mining: Guidance for the Mining Industry in Raising Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level”.*

72. *The Working Group recommends that civil society organizations:*

- (a) *Continue to raise awareness about the respective obligations and responsibilities of the Government and of business enterprises under international human rights law to prevent and address adverse human rights impacts related to the operations of business enterprises;*
- (b) *Consider holding human rights awareness-raising events for government agencies that focus on economic and commercial matters;*
- (c) *Continue to champion the rights of affected communities and human rights defenders;*
- (d) *Engage in developing a national action plan on business and human rights through multi-stakeholder dialogue, including the voices of affected communities and human rights defenders.*

Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas acerca de su misión al Brasil (12 de mayo de 2016) (A/HRC/32/45/Add.1)

Disponible solo en inglés

Recommendations:

93. *The Special Rapporteur makes some recommendations to address the most pressing issues she observed during her mission. They relate to the need for urgent measures to address violence and discrimination against indigenous peoples; strengthen State institutions such as FUNAI; build the capacity of State officials, including senior members of the executive and lower court judges, in the light of their inappropriate application of doctrines that deny rights; redouble efforts in land demarcation and protection; allocate resources to improve*

access to justice; guarantee meaningful good-faith prior consultation and participation of indigenous peoples in relation to large-scale or high-impact development projects and respect for indigenous peoples' own consultation and consent protocols and proposals for addressing development issues; and ensure participatory impact assessments and redress for harm caused.(...).

97. *The Special Rapporteur recommends that the Government:*

- a) *Redouble efforts to move beyond the current impasse in relation to land demarcation. This is particularly urgent in the states of Mato Grosso do Sul, Bahia, Santa Catarina and Rio Grande do Sul. The executive should develop, in collaboration with indigenous peoples, proactive proposals to respect and fulfil indigenous rights to land, through a thorough examination of all avenues available. This should include approaches to address the judicialization of demarcation processes and give consideration to appropriate compensation in relation to their repossession of lands, recognized in the 1988 Constitution as indigenous lands, and for which the Federal or state governments granted titles to private individuals;*
- b) *Complete all demarcation processes pending at FUNAI, the Ministry of Justice and the Presidency, in particular those threatened by development projects, agribusiness expansion and natural resource extraction activities;*
- c) *Develop concrete and prioritized actions to guarantee environmental protection of indigenous lands and their natural resources and to prevent illegal activities, with due consideration to and respect for indigenous peoples' forms of organization and their special relationship with their lands;*
- d) *Ensure that all courts have a clear and uniform interpretation of the limitations of the Raposa-Serra do Sol ruling and its inapplicability to the issuance of eviction orders for indigenous peoples or the halting of demarcation procedures. The Federal Supreme Court should continue to accept requests for the suspension of eviction orders and ensure that future rulings concerning indigenous peoples' rights are fully consistent with national and international human rights standards.*

98. *The Special Rapporteur recommends that the Government (...)*

- b) *Implement the State duty to consult indigenous peoples in relation to projects, policies and legislative and administrative measures that have an impact on their rights. Such consultations should be conducted to see their free, prior and informed consent in a manner that takes into account the specificities of each indigenous people, as affirmed in ILO Convention No. 169, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the Organization of American States draft American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. In the case of development projects, consultations should be informed by independent and participatory environmental, social and human rights impact assessments;*

99. *The Special rapporteur recommends that the Government:*

- (a) *Adopt measures to redress the impacts and consequences of mining activities, agribusiness expansion and other large-scale development projects on indigenous peoples' health, lands, cultures and way of life, including their social and economic forms of organization. These measures should also address the secondary impacts of such projects, which are often associated with speculation and the entry of third parties as a result of increased ease of access to indigenous lands;*
- (b) *In the light of the allegations of ethnocide in the Belo Monte case brought by the Public Prosecutor, extreme caution should be exercised in relation to the Belo Sun mining and the Tapajós dam projects. These projects should not be considered if the potential for similar impacts exists or if the indigenous peoples concerned withhold their free, prior and informed consent following the conduct of participatory social, environmental and human rights impact assessments and good faith consultations.*

103. *The Special Rapporteur encourages the Brazilian Development Bank (BNDES) to align its policies with those of other international financial institutions, such as the International Financial Corporation, and to develop specific safeguards aimed at ensuring that it does not fund projects that pose a risk to indigenous peoples' rights. These policies should guarantee that indigenous peoples are consulted, their free, prior and informed consent is obtained and transparent and participatory environmental, social and human rights impact assessments are conducted whenever their rights are potentially impacted by a project funded by the Bank.*

104. *In keeping with their independent obligations to respect indigenous peoples' rights, corporations, including banks and other investment facilities, should conduct due diligence in relation to indigenous peoples' rights, including their land and consultation and consent rights, both for their own operations and for those in their supply chains. In all cases where human rights have been violated, companies should participate in meaningful remediation processes in consultation with the concerned indigenous peoples, use their leverage to prevent further rights violations and ensure appropriate remediation*

Informe de la Relatora Especial sobre cuestiones de las minorías relativo a su misión al Brasil (9 de febrero de 2016) (A/HRC/31/56/Add.1)

Disponible solo en inglés

Quilombo and traditional communities

107. Regarding demarcation of traditional lands, more streamlined and efficient processes which better involve communities and ensure speedy appellate procedures will be necessary to meet the promise of the 1988 constitution.

108. Measures should be taken to improve the capacity of the National Institute for Colonization and Agrarian Reform and other relevant institutions to deal with conflicting interests in relation to Quilombo land and resources, and to work with state and local governments to implement such mechanisms and ensure that communities are protected from discrimination when trying to enforce their rights.

Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Gulnara Shaninian. Misión al Brasil (30 de agosto de 2010) (A/HRC/15/20/Add.4)
Disponible solo en inglés

Recommendations for the business community

125. The Special Rapporteur would like to reiterate that, as a result of the collaboration of and the initiatives established by the Government, the private sector and civil society organizations, slave labour is not predominant in all sectors of the Brazilian economy, although some companies and estates still continue to use it. Businesses should include human rights principles, including provisions on the prevention of and protection against slave labour, in all contracts with joint venture partners, suppliers and subcontractors. The Special Rapporteur encourages businesses to join the National Pact, whose members are committed to not using slave labour. Members of the National Pact are also provided with information and training to help prevent slave labour. Businesses should also develop a code of conduct, which would require that their suppliers do not use slave labour. Failure to observe this requirement would result in the termination of contract.

Informe del Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos. Visita a Brasil. (17 September 2020) (A/HRC/45/12/Add 2)

Disponible solo en inglés

Conclusions and recommendations

96. Private actors are signalled to disregard laws designed to safeguard the global commons and the rights of indigenous peoples and persons of African Descent. Corporate crimes against workers and communities are perpetrated with impunity, and the rights to information and participation scaled back drastically. Various judicial and parliamentary decisions are unimplemented where unfavourable to private interests. Inflammatory rhetoric, a rejection of sustainability, and failure to prosecute has flamed another epidemic, one of intimidation, attacks, and murder of human rights defenders.

100. *The Special Rapporteur recommends that the Government:*

- (a) Establish permanent bodies of fully independent experts to help:
 - (i) Decouple economic growth from environmental degradation, in particular reducing reliance on industrial agriculture and extractive industries;
 - (ii) Advise on all natural, physical and social, scientific matters relating to environmental and occupational risks;
 - (iv) Create safeguards against corporate capture, corruption and conflicts of interest within Government, including investigation of such allegations and enhanced protection of whistle-blowers.

- (b) Urgently mobilize resources and capacity to monitor and enforce all environmental and occupational protections, collecting fees from responsible industries and eliminating self-monitoring by any regulated industries or entities chosen by business enterprises;
- (d) Elevate standards of environmental and occupational protection to equal or greater than all trading partners to stop the abuse of Brazil's people and their lands;
- (e) Align the National Council for Human Rights with the Paris Principles;
- (f) Ratify the ILO conventions on occupational safety and health, and the Ban Amendment to the Basel Convention, while reaffirming Brazil's international solidarity and commitment to international laws, including the Paris Agreement;
- (g) Require mandatory human rights due diligence of all business enterprises in Brazil, including for abuses due to toxic exposures and pollution;
- (h) Implement timely, well-coordinated and effective emergency response mechanisms for environmental and occupational disasters, including forest fires, oil spills, and industrial accidents;
- (k) Respect the fundamental role of public participation in democracy and good governance, including the priceless role of human rights defenders, and fully protect this engagement by:
 - (i) Decriminalizing and securing the release of civil society actors, including environmental, indigenous and occupational rights defenders;
- (m) Improve accountability, access to justice and an effective remedy for victims by:
 - (i) Establishing a truth and reconciliation committee for those killed or harassed for protecting their human rights, including to a healthy environment and safe work;
 - (iii) Identifying and implementing necessary reforms to ensure corporate executives are always held accountable for environmental and occupational crimes, including Vale, BHP Billiton, Samarco, Tuv Sud, and other related companies for their inaction leading up to the Brumadinho and Mariana disasters;
 - (iv) Reforming the governance structure of the Renova Foundation to replace all influence of Vale, BHP and Samarco with independent experts free of conflicts;
 - (v) Ensuring in coordination with Vale and other companies implicated the necessary resources are made available for the Piquiá de Baixo community's resettlement, and formal issuance of an apology by the Government, Vale and other companies;
 - (vi) Commissioning an independent and transparent investigation into the role of Petrobras in the August 2019 oil spill.
 - (v) Align regulatory framework with OECD standards and best practices, including performance of monitoring and review;
- (q) Protect indigenous peoples, minorities and the poor by:

(ii) Refraining from legalizing natural resource extraction indigenous lands without their consent, and ensuring criminal sanctions are issued for land grabbers and polluters.

101. *The Special Rapporteur recommends that businesses:*

(a) *Eliminate investments or linkages in their supply/value chains to areas of Brazil where human rights defenders are under attack or abuses of rights are documented among individuals or communities;*

(b) *Establish and implement human rights due diligence processes including in relation to exposures to hazardous substances and wastes;*

(c) *Guarantee meaningful consultations with communities impacted by the lifecycle of production and consumption.*

(d) *Engage in efforts towards ensuring access to justice, including adhering to legislative and judicial provisions concerning providing remediation. Specific recommendations in this regard include an urge for Samarco and the Renova Foundation to facilitate release of pertinent information to the public concerning research activities and their health and environmental impacts; and for Vale and related companies to cooperate with judicial authorities in remediation processes for the Brumadinho disaster, as well as the Piquiá de Baixo case.*

Comité de Expertos de la OIT en Aplicación de Convenios y Recomendaciones CEACR

**Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)
Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Brasil
(Ratificación: 1965)**

Igualdad de oportunidades y de trato con independencia de la raza, el color y el origen étnico.

(...) la Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para luchar contra la discriminación basada en motivos de raza, color y origen étnico, y promueva activamente la igualdad en el empleo y la profesión. En particular, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre el impacto concreto de las medidas adoptadas en el marco del Plan nacional de igualdad racial, del Programa Etno para el desarrollo de las comunidades quilombolas, o en todo caso, sobre los resultados obtenidos en este sentido. La Comisión pide también al Gobierno que siga proporcionando estadísticas desglosadas por sexo, raza y color, así como información sobre efectos conjuntos del sexo y de la etnicidad sobre la distribución y la participación de los trabajadores en las diversas ocupaciones y sectores económicos, incluyendo sus tasas de remuneración.

**Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Brasil
(Ratificación : 2000)**

Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y prestar asistencia para librar a estos niños de las peores formas de trabajo infantil y para su rehabilitación e integración social. Trata y explotación sexual de niños con fines comerciales.

La Comisión pide al Gobierno que continúe adoptando las medidas necesarias para garantizar que se libra a los niños víctimas de explotación sexual comercial y trata de esas peores formas de trabajo infantil y se les rehabilita, en particular estableciendo centros de acogida para ofrecerles servicios de rehabilitación y reintegración social. También pide al Gobierno que proporcione información sobre los resultados alcanzados a este respecto. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre el impacto de las medidas adoptadas por los diversos organismos gubernamentales pertinentes y en el marco de diferentes programas antes mencionados incluida la inspección del trabajo para prevenir y combatir la explotación sexual comercial y la trata de niños con este fin, centrándose en los ámbitos en los que se han producido acontecimientos o se han llevado a cabo proyectos de desarrollo importantes.

Identificar y llegar a los niños particularmente expuestos a riesgos. Niños trabajadores domésticos.

La Comisión pide al Gobierno que continúe haciendo todos los esfuerzos necesarios para garantizar que los menores de 18 años no realizan trabajos domésticos, de conformidad con el decreto núm. 6481 de 2008. Asimismo, pide de nuevo al Gobierno que proporcione información concreta sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados alcanzados, incluida información sobre el número de niños trabajadores domésticos identificados y de niños que han sido librados de estos tipos de trabajos y rehabilitados.

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019), Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Brasil (Ratificación : 2001)

Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica

La Comisión acoge con agrado las medidas concretas adoptadas por el Gobierno y los resultados alcanzados y le pide que continúe realizando esfuerzos para velar por la eliminación progresiva del trabajo infantil en el país, centrándose en los niños de menor edad, los varones y los niños afrobrasileños. También pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas adoptadas en el marco del PETI reformado, el Programa de ayuda familiar y otras iniciativas, y que transmita información estadística sobre los resultados logrados a este respecto. Por último, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos realizados en lo que respecta a la adopción del plan nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes trabajadores, y que transmita una copia de este plan cuando haya sido adoptado.

Ambito de aplicación

La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para reforzar la capacidad y ampliar el alcance de los servicios de inspección del trabajo a fin de garantizar que se detectan los casos de trabajo infantil en la economía informal y que los niños menores de 16

años que trabajan por cuenta propia o en la agricultura familiar se benefician de la protección prevista por el Convenio. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados alcanzados.

**Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)
- Brasil (Ratificación : 1952)**

Protección adecuada contra la discriminación antisindical.

Recordando la importancia fundamental de garantizar una protección eficaz contra la discriminación antisindical, la Comisión pide, al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la legislación establezca expresamente sanciones específicas suficientemente disuasorias contra todos los actos de discriminación antisindical.

Articulación entre la negociación colectiva y los contratos individuales de trabajo

La Comisión recuerda una vez más que la obligación de promover la negociación colectiva establecida en el artículo 4 del Convenio requiere que los derechos y garantías establecidos en los convenios colectivos aplicables, no puedan ser dejados de lado por medio de la negociación individual de las cláusulas de los contratos de trabajo, en el entendido de que éstos últimos siempre pueden prever condiciones de trabajo y de empleo más favorables. La Comisión reitera asimismo que este principio también se expresa explícitamente en el párrafo 3 de la Recomendación sobre los convenios colectivos, 1951 (núm. 91). Si bien subraya una vez más que los mecanismos de negociación colectiva pueden tener en cuenta las necesidades e intereses específicos de las distintas categorías de trabajadores que pueden, si lo desean, estar representados por sus propias organizaciones, la Comisión recuerda que este Convenio es plenamente aplicable a los trabajadores cubiertos por el artículo 444 de la CLT en la medida en que, en virtud de sus artículos 5 y 6, sólo pueden excluirse de su ámbito de aplicación los miembros de la policía y las fuerzas armadas (artículo 5) y a los funcionarios públicos adscritos a la administración del Estado (artículo 6). La Comisión reafirma, por consiguiente, que el Convenio no permite la exclusión de su ámbito de aplicación con base en el nivel de remuneración de los trabajadores. Por consiguiente, la Comisión reitera su petición al Gobierno de que adopte, previa consulta con los interlocutores sociales representativos interesados, las medidas necesarias para que el artículo 444 de la CLT se ajuste al Convenio.

Promoción de la negociación colectiva libre y voluntaria. Sometimiento de los convenios colectivos a la política económica y financiera

La Comisión recuerda que, durante años, ha insistido en la necesidad de derogar el artículo 623 de la CLT, que declara nulo y sin valor las disposiciones de todo acuerdo o arreglo que sea contrario a las normas que rigen la política económica y financiera del Gobierno o a la política salarial en vigor. A este respecto, subrayando que el artículo 4 del Convenio exige la promoción de la negociación colectiva libre y voluntaria, la Comisión recordó que: i) las autoridades públicas podrán desarrollar mecanismos de discusión e intercambio de puntos de vista con objeto de alentar a las partes negociadoras a tener en cuenta voluntariamente las consideraciones relativas a la política económica y social del Gobierno y la protección del

interés general, y ii) las restricciones a la negociación colectiva en materia económica sólo deberían ser posibles en circunstancias excepcionales, es decir, en casos de dificultades graves e insuperables, con el fin de mantener los puestos de trabajo y la continuidad de las empresas e instituciones.